

La crisis del euro y el movimiento sindical europeo

Vasco Pedrina

Tras el rescate a los bancos y la adopción del primer conjunto de medidas destinadas a la recuperación de la economía, las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros empezaron, a principios de la primavera de 2010, a imponer planes de austeridad draconianos y antisociales. Son planes fruto de una política cada vez más coordinada a nivel de la Unión Europea, que está adentrándose en una nueva fase con el Pacto del Euro y el nuevo pacto fiscal. Camuflados como instrumentos para combatir los «desequilibrios macroeconómicos», se han puesto en marcha nuevos mecanismos. Estos proporcionarán a las autoridades comunitarias los medios para intensificar la presión para el desmantelamiento social general. Concretamente, se trata de una «camisa de fuerza salarial» que pone en entredicho la autonomía de los interlocutores sociales (uno de los pilares del modelo social europeo), aumenta la edad de jubilación en los países europeos e introduce legislación para frenar la deuda nacional. Esta política no sólo está teniendo repercusiones sociales alarmantes, también está conduciendo a la economía a un callejón sin salida que hace peligrar el euro.

En su congreso de Atenas, celebrado en mayo de 2011, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reafirmó su oposición a las políticas económicas neoliberales vigentes y pidió, una vez más, un cambio de rumbo. La única manera concebible de sacar a la zona del euro de la crisis es una combinación de medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico y a reducir gradualmente los niveles de endeudamiento y los desequilibrios macroeconómicos. La CES reclama un «nuevo acuerdo, social y verde» que integre en un gran plan de inversión, la emisión de eurobonos, un nuevo mandato del Banco Central Europeo (es decir, la obligación de actuar como «prestamista y comprador de última instancia») y una política industrial que favorezca las bajas emisiones de carbono, apoyada por reformas fiscales que deberían incluir un impuesto sobre las transacciones financieras. En lo que a Grecia respecta, ahora está claro que no podrá salir del círculo vicioso en que se encuentra sin un verdadero plan de recuperación financiado por la UE en el marco de una especie de Plan Marshall para los países en crisis. La CES también pide una revisión exhaustiva del Pacto del

Euro y del pacto presupuestario, en particular en relación con las medidas relativas a los salarios y las jubilaciones.

Movilizaciones contra la asfixia social

Con objeto de apoyar este programa económico alternativo, en los dos últimos años la CES ha celebrado cinco días de acción europea, el último el 29 de febrero de 2012. Las manifestaciones y las huelgas se extendieron por muchos países europeos, pero no generaron presión suficiente para detener la apisonadora neoliberal. Allá por los tiempos del «compromiso social democrático», bajo la presidencia de Jacques Delors, unas manifestaciones de esta magnitud se hubiesen considerado una buena razón para iniciar negociaciones. Hoy, ya no es así. Ni las autoridades de la Unión Europea ni las de los Estados miembros se han dejado influenciar por las acciones de protesta. Es cierto que, aunque el movimiento sindical europeo ha conseguido suprimir las disposiciones legales más retrógradas del Pacto del Euro, su propulsión antisocial prevalece, al igual que los planes de austeridad nacionales. Al mismo tiempo, algunos pilares del modelo social europeo están siendo atacados sin tregua. Sintomático de esta situación es la negativa de las autoridades políticas europeas a corregir el precedente creado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con las sentencias de los casos Laval, Viking, Ruffert y Luxemburgo de 2007-2008. A través de dichos fallos, el Tribunal cuestionaba los principios básicos de la Europa social, como la primacía de los derechos sociales básicos sobre las libertades económicas del mercado interno, el principio de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor», el derecho a huelga para combatir el dumping salarial y la autonomía de los interlocutores sociales.

El sindicalismo europeo en la encrucijada

La «Europa social» está bajo presión. Es obvio, no habrá cambio de rumbo a menos que la presión que ejerzan las huelgas y acciones políticas coordinadas a nivel europeo aumente a una escala muy distinta a la de los logros alcanzados hasta la fecha. Y aún así, en la estela de la crisis, los sindicatos retroceden en su lucha, adoptando una postura

Los sindicatos retroceden en su lucha, adoptando una postura defensiva en los entornos nacionales

defensiva en los entornos nacionales. Esta claro que los sindicatos no han destinado suficientes esfuerzos a la movilización europea. Ni siquiera las 80.000 personas que se manifestaron en Bruselas consiguieron un impacto suficiente.

Si no queremos asistir, impotentes, al declive irremediable del movimiento sindical europeo, es el momento de examinar de nuevo nuestra estrategia. El debate sobre esta cuestión que está teniendo lugar en la izquierda política y en el movimiento sindical está dando lugar a dos corrientes de pensamiento. Una de ellas promueve una estrategia de «políticas renacionalizadoras». Los que apoyan esta «estrategia colchón» sostienen que, como la Unión Europea se está dirigiendo hacia la

condenación neoliberal, la única respuesta realista sería crear redes de resistencia para defender el Estado social en el plano nacional. Los defensores de izquierdas de esta postura están situándose en el mismo campo que los conservadores del movimiento sindical que, como muchas confederaciones nórdicas, consideran que la «vía solitaria» es el mejor modo de defender su «modelo social nórdico», aunque éste se vea más y más amenazado por la Unión Europea.

La otra corriente de pensamiento promueve una «estrategia ofensiva» para la europeización de las luchas sociales. Su argumento es que la única alternativa posible es un salto cuantitativo y cualitativo hacia adelante en la acción y movilización conjuntas en toda Europa. Pero los días en que puede hacerse un salto de estas características están contados. Existe un grave riesgo de que el Pacto del Euro y el pacto fiscal, junto con la totalidad de los planes de austeridad, causen un incremento tal en los desequilibrios dentro de los países y entre los mismos que, con el aumento de las fuerzas populistas, las tensiones sociales y políticas pasen a ser insostenibles. Las tensiones cada vez mayores entre las confederaciones sindicales en Europa y dentro de los países (como Italia) permiten hacerse una idea de hacia dónde nos puede llevar esta situación, a saber, hacia una desastrosa parálisis del movimiento obrero.

Motores para europeizar las luchas sociales

Las huelgas y las movilizaciones que han tenido lugar durante los dos últimos años en varios países europeos han llevado a la aparición de nuevas reivindicaciones, nuevas formas de acción y nuevas alianzas de las que pueden extraerse enseñanzas útiles para la europeización de las redes sindicales de resistencia. Al mismo tiempo, existen otras vías que pueden conducir al salto cualitativo descrito. En el Congreso de la CES celebrado en 2011 se discutieron dos propuestas de campañas con potencial para lanzar una contraofensiva efectiva y coordinada.

Una de estas propuestas se refiere a la respuesta a las políticas económicas neoliberales actuales. Se basa en el programa económico alternativo de la CES antes mencionado, en la mayor coordinación de la política de negociación y en una ofensiva para una política europea sobre salarios mínimos y contra la precarización del empleo. Si quieren alcanzarse estos objetivos, es preciso fortalecer las capacidades para la celebración de huelgas en el lugar de trabajo en apoyo de la reivindicaciones europeas. De acuerdo, es cierto que el Congreso de la CES adoptó una propuesta de los sindicatos españoles (Comisiones Obreras, CCOO, y Unión General de Trabajadores, UGT) que reclamaba un examen riguroso de la viabilidad de las huelgas coordinadas o una huelga general europea, pero lo hizo sin demasiada convicción. Está claro que seguimos faltos de voluntad política, pero esto puede cambiar con la presión que ejerce el aumento de la precariedad.

La segunda propuesta, titulada «igualdad de remuneración, igualdad de derechos», pretende dar un nuevo impulso a la lucha por los derechos de los trabajadores, que

están siendo atacados casi por doquier, así como a la lucha contra el dumping salarial. En apoyo a esta campaña, la Federación Suiza de Sindicatos ha propuesto el lanzamiento de una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI): Para una Europa sin *dumping* salarial que dé prioridad a los derechos sociales básicos sobre las libertades económicas. De conformidad con el nuevo Tratado de Lisboa, los ciudadanos pueden dirigir a las autoridades de la Unión Europea peticiones de nuevas políticas y leyes si las acompañan de 1 millón de firmas. Una ECI de estas características tendría por objeto otorgar a la Unión Europea un mandato para que las medidas legislativas necesarias para garantizar la prioridad de los derechos sociales básicos sobre las libertades económicas se apliquen en todo el territorio.

El lanzamiento de esta ECI permitiría una amplia sensibilización (y movilización) en los lugares de trabajo y entre las filas sindicales en toda Europa, algo que al día de hoy no ha sido posible. Otros movimientos sociales y fuerzas políticas que comparten nuestras inquietudes sobre el futuro de la Europa social podrían adherirse a esta ECI. El Congreso de la CES aceptó esta segunda propuesta de campaña. Pero no dio una luz verde clara a su motor decisivo, la Iniciativa Ciudadana Europea. Las reservas proceden de países como Francia, Reino Unido e Italia, cuyas confederaciones sindicales alegan que no tienen por costumbre recoger firmas para este tipo de instrumento. Estos países subestiman el potencial de una iniciativa de los ciudadanos como instrumento sensibilizador y de presión política descentralizado dirigido al logro de un objetivo común para toda Europa.

El Congreso de la CES podría haber enviado una señal clara para una contraofensiva política y sindical europea a gran escala. La falta de energía para avanzar por este camino se debe al modo en que los sindicatos han sido atacados y debilitados en algunos países.

El giro social y político sólo puede darse con una mayor coordinación de la política sindical

Esta situación se ve agravada por la naturaleza no simultánea de la crisis y las muy diversas tradiciones sindicales. Sin embargo, es muy posible que una respuesta que se ajuste a los desafíos actuales sea viable si la presión de la precariedad aumenta aún más, entonces las personas se verán obligadas a aceptar que el giro social y político sólo puede darse con una mayor coordinación de la política sindical que trascienda fronteras. Para ello será preciso establecer una alianza con los movimientos sociales y las fuerzas políticas. Está en juego el futuro de la Europa social y del proceso de integración europeo.

Vasco Pedrina es Secretario Nacional del sindicato interprofesional suizo UNIA y Vicepresidente de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM). Representa a la Federación Suiza de Sindicatos (SGB/USS) en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).